

La falta de agua de calidad y el recorte del Tajo-Segura obliga a arrancar 500.000 árboles frutales

La Federación Provincial de Regantes remite un informe a la ministra Rosa Aguilar que revela que la provincia ha perdido un 66% de la superficie de regadío del trasvase en los últimos cinco años

🕒 01:40 VOTE ESTA NOTICIA ☆☆☆☆☆

Me gusta



F. J. BENITO

Los agricultores de la provincia cuyas explotaciones dependen del agua del trasvase Tajo-Segura han dejado en barbecho en los últimos cinco años (2005-2010) el 66% de la superficie de regadío al carecer de caudal de calidad. Los regantes han arrancado 500.000 árboles frutales y, ahora mismo, dudan de que puedan mantener en explotación las diez mil hectáreas en producción. Los datos forman parte de un informe que la Federación Provincial de Comunidades de Regantes trasladará esta semana a la ministra de Medio Rural, Rosa Aguilar, para reclamar que pare los pies al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en sus intentos de cerrar la transferencia.



Los agricultores que reciben el agua del Tajo-Segura denuncian que la situación empieza a ser insostenible por la falta de garantías hídricas.

La reacción se produce tras los dos últimos pasos adelante dados en contra del trasvase. El primero desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, al aprobar un aumento del 40% en el caudal ecológico del río en Aranjuez, que recortará, según agricultores y Consell, en 350 hm³ las reservas para enviar a Alicante y Murcia, y el segundo por el propio Barreda, que quiere ahora que el Tajo pueda ser utilizado de forma recreativa en Toledo como sucedía cuando el presidente castellano-manchego era un niño y se bañaba en sus aguas. En este sentido, Ángel Urbina, portavoz de la Federación Provincial de Comunidades de Regantes y de Riegos de Levante, acusó ayer a Barreda de practicar "terrorismo de Estado hídrico, no ya solo por sus acciones contra el trasvase, sino que está generando una gran incertidumbre entre los agricultores y las empresas que se piensan ahora mismo sus inversiones en la provincia, precisamente porque no hay garantías de agua". Urbina recordó que "hemos modernizado todas nuestros regadíos para ser lo más efectivos posibles en el uso del agua y ahora nos encontramos con que no nos quieren dar ni una gota".

La posible eliminación de los aportes de agua del río Tajo a la provincia tendría consecuencias letales porque significaría la ruina para el 62,18% de la agricultura de regadío, un sector que da a empleo a 51.325 trabajadores. El incumplimiento de las expectativas de caudales llegados a la provincia a través del trasvase desde su puesta en marcha supuso la pérdida de 17.325 hectáreas entre 1998 y 2006, al no contar con agua suficiente y de calidad. Cifra a la que hay que sumar ahora las 20.000 hectáreas que la comunidad de Riegos de Levante tiene en barbecho, el 66% del total de la tierra de cultivo que depende del caudal del Tajo, según los datos aportados por Ángel Urbina.

El agua del Tajo resulta clave para garantizar el futuro social y económico de Alicante. No en vano cualquier recorte en el plan de cuenca comprometería el abastecimiento de 1.576.000 personas, la continuidad de 110.000 empresas y 636.000 empleos que general un PIB de 74.800 millones de euros, según los datos que maneja la Universidad de Alicante y la patronal Coepa. La propia Confederación del Segura sostiene que las desaladoras son un gran complemento pero nunca podrán sustituir por sí solas al trasvase.

En el apartado económico la imposición de reservas hídricas en los planes de cuenca, representaría también un serio revés para el turismo: un sector que mueve 12.000 millones de euros al año y mantiene 290.000 empleos. "Lo que está pasando con el Tajo-Segura es un disparate nacional", apunta el catedrático de Geografía Regional, Antonio Rico.

Quince millones al año para obras

Las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, cedentes del agua del Tajo que llega a Alicante y Murcia reciben desde 1998 alrededor de 15 millones de euros al año de los agricultores y los ayuntamientos por el caudal cedido. Una cantidad que, en teoría y según la ley del trasvase, debiera utilizarse para financiar proyectos ambientales como, por ejemplo, la garantía de abastecimiento, y que confirma que ni alicantinos, ni murcianos reciben el agua gratis, según datos que maneja la patronal Coepa. Con anterioridad a 1986, la compensación económica, que suponía el 4% anual del coste las obras, la recaudaba el Estado, que era el encargado de aplicar esos ingresos a dichas labores de mejora. Las necesidades de agua totales en la zona regable del trasvase en Alicante ascienden a 381,89 hm³ al año, mientras que la dotación media del trasvase Tajo-Segura es sólo de 125 hm³, debido principalmente a la sequía que sacudió hasta hace dos años el complejo de embalses Entrepeñas-Buendía. Hoy las situación ha mejorado sustancialmente con los embalses almacenando reservas por encima de los mil hectómetros cúbicos, pero no se ha trasladado a una mejora en los envíos de agua.

Las necesidades de agua totales en la zona regable del trasvase en la provincia ascienden a 381,89 hm³ al año, mientras que la dotación media del Tajo-Segura es sólo de 125 hm³. El sector agrícola alicantino tendría derecho a recibir 3.500 millones de euros en concepto de indemnización más el lucro cesante por los recortes.